

Santiago, veintidós de marzo de dos mil veinticuatro.

Proveyendo los escritos folios 6, 7 y 8: a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

VISTO:

PRIMERO: Que comparece la abogada Libertad Triviño Alvarado, en representación del imputado Andrés Varas Quijón, quién deduce en su favor acción constitucional de amparo, en contra del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en reprogramar por novena vez la audiencia de juicio oral, mediante resolución de 5 de marzo de 2024, dictada en autos RIT 249-2021 de dicho tribunal, manteniendo la medida cautelar de arraigo nacional respecto al amparado, vulnerando con ello la garantía prevista en el artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República.

Refiere, en síntesis, que este caso resulta uno paradigmático y grosero de indefensión frente al sistema procesal penal, que evidencia la incapacidad del Estado de asegurar los derechos más básicos del debido proceso, como es el ejercicio del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, al permitir que se mantenga una medida cautelar que supera con creces el tiempo de unan eventual condena.

Como contexto, expone que el amparado se encuentra acusado por un delito de estafa, encontrándose a la espera del juicio oral y sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional desde hace seis años y medio, esto es, desde el mes de octubre del año 2017 cuando fue formalizada la investigación a su respecto.

Señala que, luego de una serie de incidentes y deducida la última acusación por parte del Ministerio Público, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictó auto de apertura el 4 de agosto del año 2021. A continuación, el 4° Tribunal de Juicio Oral de Santiago, fijó audiencia de juicio para el 1 de octubre de 2021, la que ha sido sucesivamente reprogramada, hasta el día 5 de marzo último, oportunidad en que se fijó, por novena vez, audiencia de juicio oral para el 5 de agosto de 2024, pese a que ha instado siempre por la realización del juicio.

Expresa que el amparado ha sido el único interviniente que se ha opuesto en cada oportunidad a esta dilación que estima indebida, pues



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TVCGXMLWZKN

quiere ejercer su derecho a un juicio oral, dado que es la única oportunidad para que se acredite su inocencia, y con ello se deje de perturbar su libertad personal.

Precisa que, si bien la medida cautelar de arraigo puede considerarse de menor entidad, el amparado se ha encontrado sometido a dicha medida por un tiempo excesivo y desproporcionado para un ciudadano respecto del que se presume su inocencia. Sin embargo, el tribunal mantuvo la medida cautelar dado su peligro de fuga, aun cuando nuestro ordenamiento permite sustituir una medida cautelar personal por una fianza cuando esta se impone únicamente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena.

Sostiene que un proceso judicial no puede continuar indefinidamente y carente de límites sin afectar la eficacia, el prestigio de la administración de justicia y las garantías constitucionales, en este caso la libertad ambulatoria del amparado.

Solicita, en definitiva, que se ordene llevar a efecto el juicio oral con los acusados que se encuentren presentes, revocar la medida cautelar de arraigo nacional que pesa sobre el amparado, o en subsidio se reemplace ésta por una fianza que garantice su comparecencia en el procedimiento, y disponer cualquier otra medida que se estime conveniente para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuando el informe solicitado, comparecen las juezas titulares del 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Carolina Escandón Cox, Adriana Carolina Herrera Sabando y Paulina Alejandra Sariego Egnem, dando cuenta de los antecedentes de la causa.

Afirman que todos los acusados, entre ellos el amparado, se encuentran sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional del artículo 155 del Código Procesal Penal y desde que se recibió el auto de apertura con fecha 19 de agosto de 2021, la audiencia de juicio oral se ha reprogramado en diversas oportunidades a petición de los intervinientes y en base a hechos de fuerza mayor, imposibles de prever tales como licencias médicas de los abogados, acusados, testigos u otras circunstancias graves de difícil superación.



En lo que respecta a la audiencia realizada el pasado 5 de marzo, sostienen que la defensa pública del acusado Octavio Alarcón, argumentó un cambio de abogado defensor licitado, designándose en su reemplazo a un nuevo defensor, Matías Mardones Vásquez, quien recientemente había asumido el conocimiento de la causa, quien indicó que hizo presente esta situación al fiscal, haciendo ver que no contaba con los antecedentes necesarios para ejercer una adecuada defensa, señalándole el representante del Ministerio Público, que estos estarían disponibles el 15 de marzo, en circunstancias que el juicio se encontraba programado para el día 18 de marzo. En este escenario, el solicitante manifestó que aquello impedía el ejercicio de una defensa adecuada respecto a su representado.

En dicha oportunidad, señalan que el Ministerio Público no se opuso a la solicitud, tampoco las defensas de los acusados Adolfo Rodríguez, y Pablo Méndez. Sin embargo, manifestaron su oposición el querellante Consejo de Defensa del Estado y la defensa del amparado, expresando, este último interviniente, que una nueva reprogramación implicaría que su representado se mantuviera por más de 6 años sujeto a la referida medida cautelar de arraigo nacional.

Indican que, finalizado el debate y revisando los antecedentes que obran en la causa, se accedió a dicha solicitud, teniendo especialmente presente la necesidad de cautelar el derecho a defensa del acusado Octavio Alarcón, cuyo abogado defensor estaba impedido de asumir una adecuada defensa técnica, cuestión que de no atenderse, vulneraría las normas del debido proceso a su respecto, cuestión que la mayoría de los intervinientes comprendieron de la misma forma.

Concluyen que no han incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, pues lo resuelto está dentro de las facultades propias del cargo y obedecen al deber de cautelar los derechos de los justiciables, siendo básico para el derecho de defensa del acusado, contar con un abogado debidamente capacitado y preparado para asumir su representación.

En cuanto a la solicitud de sustituir el arraigo nacional por una caución de \$1.000.000, al considerar la defensa como relevante el transcurso de tiempo y la necesidad del amparado para salir del país desde el 28 de marzo al 9 de abril, previo debate, expresan que se rechazó dicha solicitud



estimando que el solo tiempo transcurrido no resultaba un antecedente suficiente para estimar que habrían variado las circunstancias que se tuvieron en vista para imponerla y porque se mantenía la necesidad de asegurar su comparecencia a los actos del procedimiento. Asimismo, se rechazó la petición en orden a autorizar la suspensión de dicha medida para el solo efecto de efectuar el viaje antes señalado, toda vez que, atendida la gravedad de los hechos y penas solicitadas por los acusadores se acrecentaba el peligro de fuga del referido acusado.

Finalizan señalando que misma petición había sido levantada en audiencias anteriores por la defensa del acusado Varas Quijón, resolviendo esta Corte de Apelaciones la mantención de dicha medida cautelar, impidiendo su salida del país en dicha oportunidad.

TERCERO: Que, el recurso de amparo tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, pueda ocurrir a la magistratura a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, concordante con lo señalado en el considerando precedente, el recurso de amparo tiene como objeto restablecer el imperio del derecho ante cualquier perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de la libertad personal y seguridad individual, que tenga como causa un acto u omisión arbitraria o ilegal.

QUINTO: Que, conforme se aprecia del tenor del libelo, el fundamento inmediato del recurso radica en la ilegalidad de la decisión del tribunal en orden a mantener la medida cautelar de arraigo nacional respecto al amparado, reprogramando el juicio oral por novena vez, fijando como fecha para su realización el 5 de agosto de 2024, aduciendo la defensa que la decisión del tribunal es ilegal y arbitraria, al extender la limitación de la libertad ambulatoria del amparado, quien ha instado siempre por la realización del juicio para probar su inocencia.

SEXTO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, se debe señalar que, si bien es cierto que el tribunal recurrido reprogramó por novena vez la realización del juicio oral, lo cierto es que abrió debate



respecto de tal circunstancia, allanándose a ello el ente persecutor, el querellante y las defensas de los otros tres co-imputados.

A continuación, ante la solicitud de la defensa del amparado de dejar sin efecto la medida cautelar decretada y, en subsidio, de sustitución de la misma por una caución, igualmente dio la palabra a los intervinientes, resolviendo las peticiones formuladas de forma negativa.

SEPTIMO: Que, de lo expuesto fluye que, aquello que se pretende revertir por la vía del amparo, corresponde a resoluciones dictadas , por el tribunal competente, en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo al procedimiento fijado en la ley, contemplando el ordenamiento jurídico medios de impugnación, como el recurso de apelación que dedujo, en su oportunidad, el Ministerio Público contra la resolución de siete de septiembre de dos mil veintitrés, que accedió a lo pretendido por el amparado en cuanto a alzar la medida cautelar de arraigo nacional a su respecto, y que fue revocada por la Tercera Sala de esta Corte en el ingreso N° 4807-2023 del Libro Penal.

OCTAVO: Que, no obstante lo indicado, esta Corte considera relevante señalar que el transcurso del tiempo sin la realización del juicio oral respectivo, al contrario de lo indicando por las juezas informantes, es una circunstancia que, eventualmente, puede tornarse arbitraria y afectar las garantías del imputado, cuestión que no se configura en la especie, máxime si cinco de las suspensiones y reprogramaciones del juicio fueron decretadas a raíz de las peticiones de las defensas respectivas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 127 del Código Procesal Penal y 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza**, sin costas, el recurso de amparo deducido por Libertad Triviño Alvarado, en representación del imputado Andrés Varas Quijón, en contra de la resolución dictada con fecha cinco de marzo del año en curso, por el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol I.C. N° 694-2024 Amparo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TVCGXMLWZKN

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Il. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Sandra Araya Naranjo y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TVCGXMLWZKN

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jenny Book R., Sandra Lorena Araya N. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, veintidos de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a veintidos de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TVCGXMLWZKN